

En el medio y bajo Caguán (Caquetá)

Crisis humanitaria por el Plan Patriota

Graves denuncias en Foro

"Militarización e Impacto Social del Plan Patriota en el Sur del País"

*CAMILO RAIGOZO
ENVIADO ESPECIAL

El pasado viernes 29 de julio se realizó el Foro "Militarización e Impacto Social del Plan Patriota en las comunidades del sur del país", de manera simultánea en Bogotá, Florencia y Cartagena del Chairá. Centenares de personas, dirigentes agrarios, campesinos, sindicales y populares, se reunieron para escuchar las denuncias concretas que presentaron las víctimas de los atropellos de la Fuerza Pública en las zonas de los operativos del Plan Patriota.

En Bogotá, convocados por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados "Alvear Restrepo", la Corporación Reiniciar, el Banco de Datos del Cinep y las comunidades del Medio y Bajo Caguán, de Puerto Toledo (Meta), Guaviare y Putumayo, se realizó el Foro con la participación de tres centenares de personas. Ricardo Vargas de Acción Andina, intervino sobre fumigaciones; Diana Murcia del Colectivo de Abogados sobre "Seguridad Democrática", el padre Javier Giraldo sobre paramilitarismo, terrorismo de Estado y ley de impunidad; y Carlos Lozano, director de VOZ, desarrolló el tema sobre el Plan Patriota.

En Florencia, en la Universidad de la Amazonia, también se hicieron denuncias de los atropellos de los militares, que ven a los campesinos como auxiliares de la guerrilla.

En Cartagena del Chairá

En el municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, se realizó el Foro en el parque principal, donde se denunciaron violaciones a los derechos fundamentales de las personas, a partir de la implantación del Plan Patriota.

"En primer lugar, el Ejército trató de impedir la asistencia de la gente a dicho foro, perifoneando desde helicópteros y por las emisoras radiales de esa institución, que se abstuvieran de ir al acto 'planeado por los terroristas', porque eso les acarrearía amargas consecuencias", le comentaron a VOZ algunos participantes del evento. Además, para boicotear el certamen, los militares realizaron simultáneamente una brigada de consultas médicas y de salud. Sin embargo al foro al que asistieron al menos mil quinientas personas fue todo un éxito.

Filmación sospechosa

Durante la realización del certamen, uniformados tanto de la Policía como del Ejército, filmaron a las personas participantes y al menos dos sujetos sospechosos (uno afro colombiano) de civil, también grabaron muy detalladamente con cámaras de video tanto a las personas organizadoras como a miembros de las ONG, periodistas y demás asistentes. La

persona afro colombiana, fue vista posteriormente en camaradería con militares.

Entre las múltiples denuncias, se acusó al Ejército de querer matar a la población de física hambre, por cuanto restringe la cantidad de alimentos, medicinas e insumos para las labores agrícolas, que los campesinos pueden adquirir y transportar. Por ejemplo, Eligio Suaita*, residente en la inspección de Remolino, distante cinco horas en lancha por el río Caguán, quién tiene que velar por el sustento de sus cinco hijos y su esposa, le comentó a VOZ que el sólo viaje de venida a Cartagena del Chairá y su regreso, le sale por 400 mil pesos, pero el Ejército sólo le deja pasar mercado hasta por 200 mil pesos, que apenas le alcanza para una semana. De las 480 toneladas de alimentos que consumen los pobladores de Remolino, sólo permiten pasar 140 toneladas.

Detenciones arbitrarias y asesinatos

Los campesinos denunciaron también las detenciones arbitrarias por parte del Ejército con montajes y delaciones falaces de supuestos testigos. Es el caso de los jóvenes Jorge Aroca, Alexander Acosta, Ferny Acosta, Libardo Aroca y Raúl Pineda, quienes fueron detenidos arbitrariamente por militares de la Brigada Móvil número seis el pasado 15 de julio en la vereda El Doncello. Fueron presentados ante los medios masivos de comunicación como guerrilleros y aunque por falta de pruebas tuvieron que ser dejados en libertad, siguen atados al proceso penal.

Por otro lado, Martín Manrique Ávila, denunció, que hace año y medio, el capitán de la policía Alexander Collazos y el agente de policía Yeison Moreno Ibarquén, asesinaron a golpes y puñaladas a un hijo suyo, por el que nadie ha respondido. Los dos miembros de esa institución fueron trasladados del lugar mientras que el Personero y el Procurador han ayudado muy poco a la aplicación de justicia.

Las fumigaciones indiscriminadas con glifosato, han acabado con los cultivos de pancoger y otros productos básicos de la alimentación, lo que ha agudizado la ya difícil situación alimentaria del campesinado. Esas mismas fumigaciones han vuelto estériles las tierras, enfermado la ganadería y a los seres humanos de la región.★